

Las intervenciones de masas y la cuestión del cambio político en América Latina.

Mgr. Marcelo Gómez.

Cita: Mgr. Marcelo Gómez (2007). Las intervenciones de masas y la cuestión del cambio político en América Latina. *VII Jornadas de Sociología*. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: <http://www.aacademica.org/000-106/105>

Las intervenciones de masas y la cuestión del cambio político en América Latina

Mgr. Marcelo Gómez

Centro de Estudios e Investigaciones de la UNQ -Taller "Teoría e Historia de los Movimientos Sociales y la Acción Colectiva" Carrera de Sociología, UBA.

E-mail: amargom@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El multifacético proceso de movilización de masas asociado a la crisis y agotamiento de las políticas neoliberales durante los '90, parecen haber desatado un proceso contradictorio de cambios políticos de vasto alcance en la mayor parte de los países de A. Latina. La envergadura y la potencialidad desplegada por una variada gama de movimientos sociales y políticos novedosos en estas coyunturas críticas trae de nuevo a la memoria viejas categorías del pensamiento revolucionario: crisis orgánica, proceso de masas, poder popular, que aluden a una centralidad de la acción colectiva desafiante, no institucionalizada y que muestra formas impensadas de conciencia, subjetividad, repertorios de lucha, autonomía, autoorganización y liderazgo.

Las crisis orgánicas que abarcan tanto la acumulación como el gobierno, alteran y debilitan los sistemas de mediaciones y controles establecidos, además de cambiar la valoración del status quo por parte de amplios sectores sociales y políticos, muchos de los cuales fueron apoyos de las reformas promercado en los '90. Sobre esta base, la movilización generalizada de actores descontentos desata procesos de cambio: el primero de los cuales es el reconocimiento de la legitimidad de la intervención de masas sobre el orden social y político, dando lugar a procesos de cambio institucional. Efectivamente: no solamente hubo crisis en el régimen social de acumulación y escenarios de inestabilidad política en la región sino que simultáneamente fueron cambiando las formas de procesamiento de estas contradicciones, surgiendo con fuerza respuestas y actores novedosos, a tal punto que algunos analistas observaron luego del 2000 no solamente una crisis de legitimidad de los gobiernos o sus políticas sino una situación incipiente de destrucción y posible refundación de los sistemas políticos de partidos (Cavarozzi, y ot., 2003).

Así una cuestión de primer orden es la de analizar las implicancias, las consecuencias, los resultados de este ciclo ascendente de las luchas populares¹, de las protestas sociales y de las capacidades de cuestionamiento e impugnación sobre el orden (en realidad, desorden) social y político que dejan las políticas neoliberales sustentadas por las clases dominantes locales y los organismos e intereses económicos transnacionales.

Examinar los resultados, la eficacia y la naturaleza política de los procesos de movilización de masas nos lleva por dos grandes andariveles: por un lado, el problema del poder con su dialéctica esquizoide entre Estado y Masas, por otro lado, el problema de la transformación con la dialéctica histórica entre cambio y conservación. Por un lado, los temas de la "transferencia" del poder con su infinita variabilidad de efectos políticos: desde la sustitución de un poder por otro hasta la integración formal o informal, pasando por la presión reivindicativa, la exclusión, represión, cooptación, institucionalización, etc. Por otro lado, el

potencial transformador, la capacidad de gestionar y realizar procesos de cambio económico, social, cultural, político, etc. Todo ello nos lleva a considerar a los emergentes movimientos sociales contestatarios en un “sentido fuerte”: en qué medida logran sustentar un contraproyecto societal y en qué medida logran sostener un protagonismo en la arena pública.

Los resultados de semejante movilización y organización política de masas no son en absoluto claros, siendo materia de reflexión y controversia la naturaleza de procesos que tienen pocos años de desarrollo y su posible desenlace.

El acervo de experiencia acumulada en los últimos años permite plantear con mejores elementos de juicio la discusión teórica y política acerca del dispositivo o los carriles por los que transitan los procesos de cambio político con intervención de masas en A. Latina: ¿cuáles son las implicancias políticas de la crisis económica?, ¿cuál es la nueva relación entre masas y política?, ¿qué alcance político tienen las acciones emprendidas?, ¿cómo se modifica en la crisis la relación entre masas/estado/acumulación?, y ¿cuál es el papel y la importancia de la democracia y el sistema de partidos en el proceso de intervención de masas?.

LA NATURALEZA DE LA CRISIS POLÍTICA Y LA ACCIÓN COLECTIVA

Proponemos aquí la hipótesis de que la forma de la crisis y la dinámica de las contradicciones del régimen social de acumulación y político de gobierno consolidados en los '90, hacen que el descontento tienda a canalizarse de forma predominante por fuera del sistema de partidos tradicionales (organizaciones sociales, nuevos partidos, sindicatos, etc) y se exprese por medios ajenos a la política representativa (acción directa desafiante, protestas de nuevo tipo), y antagonizando al conjunto de las dirigencias y liderazgos conocidos.

No cabe duda de que las insuficiencias sistémicas de los regímenes de acumulación que solamente funcionan cuando hay ingreso de capitales externos se convierten en críticas cuando se revierten los flujos internacionales de capital y no se perciben mecanismos de estabilización que no sean expropiaciones masivas o traslación de costos a los sectores más débiles. En muchos casos los costos de la crisis son descargados sobre aquellos sectores o grupos que habían sido apoyos, aliados o clases auxiliares en la implementación del nuevo modelo a comienzos de los '90, lo que genera en sí mismo un problema de sustentabilidad política.

El carácter externalizado de la acumulación (“fuga de capitales”) y el hecho de que las decisiones se localizan en actores difusos o extraterritoriales (“los mercados”), fuera del alcance de los actores y de los sistemas políticos nacionales consagra ante los ojos de amplios sectores la inocuidad e irrelevancia de la política institucionalizada ante el advenimiento de la crisis. La llegada de la fase descendente muestra de manera brutal la lógica de una apropiación/externalización de beneficios y una distribución internalizada de costos sin instancias políticas de mediación brindando bases óptimas para el surgimiento de oportunidades para la acción colectiva no institucionalizada.

Unas elites completamente sumergidas en el discurso de la globalización y la religión de los mercados convierten el poder político en un administrador secundario e ineficaz de decisiones que ya se han tomado en instancias sustraídas al “lazo político” y a la deliberación y la decisión de los representados, devenidos “espectadores” de sus propias tragedias. Las demandas e intereses de las masas aparecen excluidas de la consideración política y los partidos políticos desdibujan sus vínculos con los intereses y demandas de la mayor parte de su propio electorado.

La llegada de la crisis muestra que esta autonomía de la política en el marco de la globalización del poder económico es en realidad extrema debilidad, que solo puede disimularse en las fases de expansión e ingreso de capitales donde aparecen buenos resultados electorales. En las fases descendentes, la ausencia de apoyos es evidente y el intento de sostener “el gobierno de los políticos” (Nun, 2000) con la sola legitimidad electoral reproduce lo que quiere evitar: redoblar las presiones sobre el sistema institucional y el surgimiento de actores demandantes no inscriptos en los sistemas establecidos de intermediación de intereses. La diferencia fundamental con el corporativismo del pasado es que mientras en los estados de bienestar esta sobrecarga sobre los sistemas de decisión ante la crisis se hacía de manera plena o parcialmente institucionalizada a través de sindicatos y partidos populares, ahora las presiones se ejercen de formas directas y no convencionales habida cuenta que las reformas neoliberales han desmantelado en buena medida estas estructuras de mediación y reducen la legitimidad a los votos. El “lazo político” (Svampa, 2005a) fuera de las mediaciones organizadas se circunscribe a los mass media y la opinión pública y gira exclusivamente en torno al problema electoral.

La matriz misma del régimen de acumulación y del régimen de gobierno son facilitantes o al menos tienen menos protecciones contra la acción colectiva no institucionalizada, ya que la opción represiva invocando la sola legitimidad electoral no solo es insuficiente sino que como se demostró en varios casos (Argentina en diciembre del 2001, Bolivia en 2003, Ecuador en 2000) es contraproducente e impracticable amplificando el proceso de deslegitimación política. Esta situación otorga lo que en la literatura clásica sobre movimientos sociales se denomina “oportunidad política” (Tarrow, 1997, Gamson y Meyer, 1999) para la acción colectiva desafiante y no convencional. Los fracasos de las elites políticas y la ausencia de respuestas económicas (que no sean el ajuste perpetuo y la convalidación de la especulación y la renta financiera) sumadas a la subordinación a los dictados de los mercados financieros proporciona fuentes inagotables de deslegitimación de gobiernos y elites, temáticas discursivas de cuestionamiento a las políticas vigentes, y sobre todo nuevos sectores disconformes dispuestos a la protesta ante la ausencia de vías alternativas y eficaces de hacer escuchar sus demandas y participar con sus intereses en la definición del bien común.

Uno de los factores más fuertes de aumento a la predisposición a la acción colectiva desafiante es la frustración de expectativas (Melucci, 1994: 170). La movilización de sectores que apoyaron o vieron con beneplácito las reformas de mercado a principios de los ‘90, que se beneficiaron de ella en el pasado pero ahora son los que pagan los costos de la crisis, conforman un elemento central del proceso de movilización de masas que implica una descomposición de los soportes que hacen posible la perduración del “modelo neoliberal”. Los ahorristas, deudores hipotecarios, transportistas, pequeños comerciantes, residentes urbanos perjudicados por las privatizaciones de servicios públicos, el campesinado propietario son casos típicos en varios de estos procesos.

La convergencia de estos sectores con aquellos que sufrieron principalmente desde sus inicios las consecuencias de las políticas neoliberales -que ya venían acumulando una experiencia organizativa y de resistencia (desocupados en Argentina y aborígenes en Ecuador)- configuran las bases de las intervenciones políticas masivas de gran escala que precipitan los cambios políticos.

LOS CASOS DE ARGENTINA Y ECUADOR: LA RESPUESTA POLÍTICA ESTATAL COMO OPORTUNIDAD PARA LA ACCIÓN COLECTIVA DESAFIANTE

Las crisis financieras de Ecuador en 1999 y de Argentina algo más tarde son ilustrativas: los gobiernos de Mahuad y De la Rúa cifraron sus esperanzas en las políticas de “confianza” hacia los mercados e inversores, en los apoyos de los organismos internacionales y sus recetas. La monotonía de ajustes fiscales ininterrumpidos, y finalmente la incautación de ahorros, reducciones de salarios y/o aumentos de tarifas liquidan completamente el apoyo de la opinión pública y convierten la recesión en depresión económica.

No es un dato menor el patrón de complicidad del conjunto de los partidos políticos tradicionales que apoyan las medidas de ajuste, o la indulgencia de las oposiciones políticas parlamentarias que temen más a la ingobernabilidad derivada de la pérdida del apoyo de “los mercados” que a las masas descontentas. Todos ellos se limitan a esperar atraer el electorado descontento sin ofrecer nada más que marketing electoral, esperando que sea el partido del gobierno de turno el que pague el costo electoral por las medidas impopulares. Todos ellos minimizan riesgos electorales con propuestas y discursos inocuos e indiferenciables entre sí, con lo que se aseguran la alternancia en el poder a costa de circunscribir la competencia política a las ofertas de imágenes, desechando toda voluntad colectiva de transformación o al menos de intervención sobre el orden establecido.

En ambos casos los principales partidos opositores terminaron respaldando diversas medidas de gobierno y ajuste, llevando a extremos la ausencia de voluntad de competir y diferenciarse políticamente: la oposición argentina no solamente avaló el retorno de Cavallo² al Ministerio de Economía sino que le concedió “poderes extraordinarios”, y la oposición ecuatoriana terminó avalando el plan de dolarización aún en contra de la opinión de sus representantes en el Banco Central y también apoyó un proyecto de ley de emergencia que hasta llegó a contemplar reformas al Código Penal que permitan el regreso del ex presidente A. Bucaram acusado de graves delitos y exiliado en Panamá desde su destitución, además del visto bueno para enfrentar de forma represiva las protestas sociales en ciernes. En sentido similar, de la Rúa se reunió con el ex presidente Menem desde hacía algún tiempo procesado judicialmente en una causa por contrabando de armas.

En ambos casos, las protestas generalizadas intentaron ser desarticuladas y enfrentadas por el gobierno sobre la base de no reconocerlas, reprimirlas o intentar disiparlas esperando el desgaste natural. La imposibilidad de articular instancias de interlocución razonables y la ausencia de apoyos dentro de las instituciones para las demandas populares, son factores que precipitaron el carácter no solamente masivo y policlasista de las protestas generalizadas sino también su rápida politización. La inexpugnabilidad del sistema político para las clases populares y las demandas de los excluidos, se agudiza en las situaciones de crisis. La ausencia de capacidad de procesar demandas deja al sistema político sin

respuesta o con la única respuesta represiva y sus variantes judicializadoras (Svampa, 2005b). La desinstitucionalización del conflicto social se observa no solamente en los repertorios de protesta fuertemente desafiantes utilizados (cortes de rutas y accesos, “toma de ciudades”, paros regionales) sino también por los actores que encarnan el desafío: los desocupados con organizaciones muchas de las cuales no estaban reconocidas en la Argentina, y los indígenas agrupados en la CONAIE en Ecuador, que aunque constituirían una organización reconocida, el liderazgo y protagonismo asumido como oposición al gobierno resultó completamente ajeno al cálculo de todos los actores políticos.

Tanto la intangibilidad de las reglas de acumulación con una lógica según la cual los beneficios se lo llevan los fuertes y los costos los débiles sin dispositivos institucionales de regulación, como un régimen de gobierno estructuralmente refractario a las demandas populares y con fuertes tendencias a la colusión de la dirigencia política partidaria que le quita el único de sus contenidos atractivos -la competencia política- hace que los protagonistas fundamentales de la acción colectiva con amplia visibilidad social sean organizaciones con altos grados de exterioridad al sistema institucional (piqueteros, indígenas, campesinos), y también con altos grados de exterioridad a los circuitos principales de acumulación (desocupados, jubilados, sin tierra, maestros y empleados públicos).

La carta represiva, que tanto De la Rúa como Mahuad intentaron jugar, no solo no resultó un recurso útil, sino que motorizó los efectos contrarios. Las amenazas de estado de sitio con suspensión de garantías y el fantasma de un baño de sangre con intervención de las FFAA fue el detonante de la reacción de las clases medias porteñas que terminaron tumbando al gobierno en Argentina, en tanto que la perspectiva de una represión masiva precipitó la división de las FFAA ecuatorianas que terminó en la intentona golpista popular-militar del 21 de enero del 2000 en Ecuador³.

La prolongación en el tiempo de las protestas, la generalización de formas “no expuestas”⁴ de protesta como el “cacerolazo” y los apagones, las concentraciones móviles y dispersas, los bloqueos de rutas y calles, los atentados, pedreas y ocupaciones de edificios públicos, suponen unas capacidades de prolongación de la ruptura del orden público que pone al descubierto la debilidad del gobierno y la imposibilidad de llevar la represión al extremo. La ausencia de organizaciones que se responsabilicen por la violencia y la ausencia de grupos armados hace también imposible legitimar la represión masiva y la búsqueda de chivos expiatorios (Della Porta, 1999). El único elemento que juega a favor de la represión y el “restablecimiento del orden” es el frecuente acompañamiento de las protestas y la desobediencia civil con saqueos y vandalismos por parte de participantes oportunistas.

Es así como la naturaleza misma de la crisis de la acumulación y el gobierno reproduce los mecanismos de intervención de masas que se potencian por la combinación de ajuste perpetuo y ausencia de alternativas políticas. Sin embargo, estas formas de intervención a través de la acción colectiva colisionan con el sistema político pero no con la institucionalidad democrática como podría haber ocurrido en otras experiencias históricas anteriores (década del ‘60 y ‘70) de amplia movilización y participación política directa de masas.

EL SIGNIFICADO DE LA ACCIÓN Y LA ORGANIZACIÓN COLECTIVA DESAFIANTE: BOLIVIA

La crisis asume su punto culminante cuando se visibilizan en pugna dos principios de legitimación política: el electoral democrático formal sobre el que se apoyan las pretensiones de mando de las clases gobernantes en las instituciones, y el de la participación con acción colectiva como forma de expresión directa de voluntades e intereses en las calles. En este sentido es interesante el análisis de García Linera (2001: 51,52) sobre las movilizaciones por el agua en Bolivia: los procesos de autoorganización bajo la forma “multitud” y su canalización masiva hacia el desafío político y el repertorio de “bloqueos” muestran no solo una capacidad de demanda al estado como sujetos de derechos, sino que “tienden a sustituirlo como mecanismo de gobierno... como un sistema alternativo de ejercicio del poder y la vida democrática”.

El proceso boliviano podría ser considerado como el caso que expone más nítidamente un componente general de todos estos procesos de intervención de masas donde la acción colectiva es “reapropiación” de soberanía, reinteriorización de los lugares de decisión sobre lo público en un doble sentido: como autodeterminación en la elaboración y realización del bien común, y como autoafirmación de intereses e identidades sociales y culturales frente a las fuerzas abstractas exteriores del “mercado”, “los bancos”, “las empresas multinacionales”, y las clases (los blancos, los k’aras) en que estas se sostienen. Esta reapropiación como hecho de poder se hace perfectamente visible en los comités de bloqueos y en la “insolencia” del discurso comunitario que incluso se expresa en su propia lengua aymará (García Linera, 2001: 75).

Por otra parte, los costos en términos de destrucción de tejido productivo y exclusión social hacen que una de las demandas de los sectores movilizados sea de orden, arrebatando una de las coartadas fundamentales de los detentadores del status quo. En efecto, las políticas neoliberales han tenido por consecuencia no un orden definido de explotación y opresión, sino lisa y llanamente procesos de desorganización social, descomposición del estado, corrupción política y generalización de comportamiento anómico en todos los niveles⁵. En este sentido, aparece también una oportunidad política: los movimientos sociales con sus notables capacidades de gestión y realización de bienes públicos y sus disciplinas organizativas tienden a aparecer en las situaciones críticas no tanto como factores de perturbación sino como esperanza de orden y ejecutividad, es decir como “poder alternativo” para el conjunto de las clases subalternas. Sin embargo, la realización efectiva de este potencial alternativo ha sido completamente heterogénea en la extensa geografía de la movilización de masas.

LOS DESAFÍOS DE LA ACCIÓN COLECTIVA FRENTE AL ESTADO: ¿UN TRAUMA HISTÓRICO?

Contrariamente a lo que ocurrió en la posguerra en Europa, donde los movimientos sociales desafiantes se fortalecieron en un contexto de estabilidad política, Estado de bienestar y democracia de partidos amplia y pluralista, en A. Latina el desarrollo enorme de los movimientos sociales en la última década acompañan el proceso inverso: desmantelamiento de los precarios aparatos protectivos del Estado, debilitamiento de legitimidades políticas y crisis de gobernabilidad. De por sí esto podría indicarnos que estamos muy lejos de los

planteos de Touraine en el sentido de que los movimientos sociales son fuerzas fundamentales del sistema de acción histórico de las sociedades democráticas y pluralistas y que entre el sistema político electoral de alternancia de elites de gobierno y la actividad de los movimientos sociales debería existir una sinergia de fortalecimiento recíproco por debajo de las contradicciones. Según Touraine, los movimientos sociales y sus luchas no tienden a debilitar sino a fortalecer los procesos de autotransformación social basados en los principios de la democracia moderna: ampliación de libertades individuales y participación en decisiones colectivas (Touraine, 1997: 105).

Sin embargo, por un lado, es claro que en nuestros países los movimientos contestatarios siendo fuerzas sociales que han precipitado crisis políticas de enorme magnitud, no se han planteado en ningún lugar como desafiando categóricamente los principios de la democracia de partidos, el régimen electoral y la organización constitucional del poder. Es más, no en todos los casos se han presentado como una forma política alternativa de gobierno, es decir con pretensiones de alcanzar la dirección de la sociedad en su conjunto desplazando a las clases dominantes tradicionales. Pero, por otro lado, es igualmente claro que en una gran mayoría de casos los movimientos sociales no se han limitado a ensayar una resistencia defensiva y reivindicativa frente a las políticas de exclusión y desintegración social, sino también que intervienen en la esfera de la política con una marcada impugnación al orden establecido y una explícita voluntad de cambios. ¿Qué tipo de relación y qué orientaciones han desarrollado frente a la política y el acceso al poder?

Un elemento para tener en cuenta en la comprensión de las características novedosas de los movimientos sociales y de la acción colectiva contestataria de la última década, es la tradición en A. Latina de la imposibilidad del triunfo y consolidación de los esfuerzos revolucionarios más formidables. Es paradigmático el proceso de la sangrienta Revolución Mexicana con el fracaso y asesinato de Madero caído en la “red de la oligarquía porfirista” y las divisiones en la insurrección campesina (Orozco y Carranza contra E. Zapata y P. Villa), que hacen imposible la consolidación de un gobierno revolucionario. Sin embargo, esta experiencia de frustración en el control del poder estatal puede asociarse a la del varguismo, el peronismo, Gaitán en Colombia, la revolución de 1952 en Bolivia, el posterior intento de Torres, Velazco Alvarado en Perú, o el mismo S. Allende en Chile, y más recientemente el Sandinismo en Nicaragua. Demás está decir que aquellos movimientos revolucionarios que no han logrado derribar los poderes establecidos como los movimientos guerrilleros guatemaltecos, colombianos, venezolanos, argentinos, uruguayos y salvadoreños, que se han disuelto sin dejar rastro o han sido incorporados de manera subordinada y dócil a los regímenes políticos vigentes con tibias reformas, tampoco permiten un atesoramiento como experiencias revolucionarias exitosas.

Los procesos revolucionarios parecen padecer en nuestros países de un verdadero “trauma estatal”. Sufren una fractura evidente entre los cuatro momentos de todo proceso revolucionario: mientras las crisis y descomposición del régimen y la rebelión popular son fenómenos frecuentes, la transferencia del poder hacia los grupos insurgentes es más rara, y cuando se logra es extraordinariamente raro que estos grupos logren estabilizarse e imponer las transformaciones por las que lucharon⁶. La proporción entre rebeliones y transferencias significativas y entre transferencias de poder y cambios revolucionarios estables es bajísima. No siendo extraños los procesos de profunda regresión contrarrevolucionaria que terminaron convirtiendo en tiempos brevísimos gestas notables de luchas populares y aparentes triunfos en dictaduras genocidas (Bolivia, Chile, Argentina de los ‘ 70 son casos típicos).

En los últimos años sin embargo, las variaciones tanto en el contexto, en las características de la crisis, en la composición de las clases movilizadas, como en las ideas y los enmarcamientos cognitivos de los movimientos, tenemos una fuerte dosis de ruptura con las décadas pasadas.

EL PAPEL DEL ESTADO Y LA MOVILIZACIÓN DE MASAS

La forma de acción del estado varió respecto a períodos previos en un sentido muy preciso: ha reducido su capacidad de estructurar política y organizativamente a las clases oprimidas, para quienes ha reservado casi exclusivamente el lugar de interlocución como “electores”. Se produce un vasto proceso de desinstitucionalización-descolectivización de las clases populares en aquellos países donde los aparatos del estado habían alcanzado mayor desarrollo (Svampa, 2005b). Desaparecen o se debilitan y entran en crisis y conflicto las agencias de distribución, de seguridad social, de salud y de protección. Los aparatos clientelares de los partidos de masas tradicionales encargados del control del comportamiento electoral también reducen su campo de acción (Acción Democrática en Venezuela, el Justicialismo en la Argentina). Finalmente, las luchas y la movilización colectiva no institucionalizada termina teniendo como escenario privilegiado al mismo estado: los trabajadores de la educación, la salud, la seguridad social, y hasta la administración judicial y la policía son protagonistas centrales de la conflictividad en casi todos los países de A. Latina⁷. El Estado pasa de ser representado como instancia de integración a percibirse como foco de conflicto.

Los mecanismos de reproducción de la dominación y de disciplinamiento social y político dejan de reposar en la extensión y la complejización de los aparatos de administración y de represión de masas. Son justamente las formas de desafiliación, destrucción de colectivos existentes, el imperio de la competencia individual y la fragmentación en el mercado, más la acción de los aparatos ideológicos –especialmente los medios masivos de comunicación- los que se espera mantengan a las masas en un estado de incapacidad crónica de intervención política.

Como se dijo, es claro que el mercado solo puede funcionar como generador de consenso y legitimidad a la dominación en las etapas expansivas cuando los costos de las reformas son compensados por los efectos del “derrame” y la estabilidad. Pero las crisis dejan al sistema sin dispositivos alternativos y sin coartadas: en este sentido el poder estatal aparece como incapaz de vehicular hegemonía. La letanía infinita del mercado y la librecompetencia en los medios no alcanza como mecanismo de control y legitimación ideológica. Muy rápidamente se hace visible la precariedad y la vulnerabilidad política del poder que tiene dificultades no solo de legitimación sino también de represión y control social. A esto es a lo que en última instancia llaman “crisis de gobernabilidad”. Esta debilidad estructural del poder estatal y de las clases gobernantes que lo detentan es un factor poderoso de incentivo a la acción colectiva generalizada: bajos costos esperados por represión, debilidad de los oponentes, divisiones en las elites y clases de apoyo, alto impacto en la opinión pública son condiciones suficientes para que amplios sectores que padecen altísimos costos del status-quo se lancen presurosos a la protesta y la acción colectiva contestataria.

Por otra parte, la doctrina universal de la “globalización” como credo político de las clases gobernantes disuelve las bases de cualquier intento de construcción hegemónica: la idea del camino único, de ausencia de alternativas, de “decisiones inevitables” impuestas desde fuera del universo político donde juegan los actores que las padecen, presupone una lógica de exclusión de las decisiones. La colocación fuera del alcance de la ciudadanía de todos los temas vinculados a la acumulación, reduce la construcción simbólica del Estado nacional de sujeto (de un destino común) a objeto de fuerzas exteriores. El nuevo orden mundial destruye las legitimidades internas de los estados como instancias de dirección de las sociedades, no solo excluyendo la participación de las masas en las decisiones sino incluso excluyendo a las propias clases dominantes locales de las mismas. Ante estas reglas de juego los actores solo pueden trasladar costos y usufructuar beneficios más que intentar organizar la sociedad y el estado de acuerdo a sus intereses (función hegemónica tradicional). Los cambios morfológicos del estado apuntan exactamente en esta dirección: las estructuras de contención y protección de las clases subordinadas han sido desmantelados y debilitados, y en cambio las estructuras de gestión y administración económica han sido fortalecidas y ampliadas. El andamiaje precario y contradictorio que muchos de los aparatos del estado habían proporcionado a las clases populares desaparece y la construcción simbólica de las masas como ajenas al poder político y al estado debilita los sentidos de pertenencia y ciudadanía.

Ahora: ¿en qué medida la proliferación de acción y organización colectiva desafiante puede ser interpretada como intentos de reapropiación del poder político y del estado?, ¿cómo describir la potencialidad política de la acción colectiva en estos contextos?.

ESTADO Y POTENCIAL TRANSFORMADOR DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

En su forma general, un agente de cambio es un soporte de acumulación de poder entendido como un incremento de capacidad de intervención en la situación sobre la base de diversos recursos: más gente, más cohesión y organización, más posiciones de mando o impugnación, más apoyos externos, más alianzas o aceptación en la opinión pública, más medios de acción y de ejercicio de la violencia, más identidad y consistencia ideológica acerca de las transformaciones a realizar, etc.

Es decir, el agente de cambio es un protoestado alternativo que tiene la pretensión de encarnar una voluntad colectiva realizando una soberanía y legitimidad nuevas.

En este dispositivo, y parafraseando a Holloway (2002: 51 y ss), la revolución es fundamentalmente producto de unas máquinas no ya de “poder hacer” sino de “hacer poder”. Los eufemismos de “acumulación de poder popular” o “construcción de un poder contrahegemónico” no cambian mucho esta matriz. La revolución es un proceso derivado necesariamente de la polarización y el antagonismo de poderes. Las situaciones revolucionarias son resultados de enfrentamientos entre un poder que no puede mantenerse y otro poder que emerge desafiante. El “estado” entendido como monopolio de la fuerza transformadora es la forma natural a la que tiende todo proceso revolucionario desde su génesis misma. Las ideas de soberanía múltiple o dualidad del poder, siempre suponen una voluntad conciente organizada de primacía y mando sobre el conjunto social. En definitiva una revolución encarna algún tipo de transferencia del poder. La encarnación de esta voluntad colectiva de transformación, el principio de realización de una soberanía y

legitimidad nuevas sobre la formación social debe reposar en un soporte interno a la misma formación social: tradicionalmente la clase obrera en donde deben superponerse la potencialidad del acceso al control de la acumulación económica, la potencialidad de la organización de masas y la voluntad y la aptitud de luchar por el poder sea por medios institucionalizados o no institucionalizados.

Como es sabido estos esquemas canónicos fueron los inspiradores del accionar bolchevique en la Revolución Rusa y de la Socialdemocracia alemana, posiblemente ambos como productos de elaboraciones de la derrota de la Comuna de París (Lenk, 1978).

Las primeras críticas profundas a estas concepciones lineales y mecanicistas del proceso revolucionario han provenido como es sabido de R. Luxemburgo quien ha enfatizado la centralidad revolucionaria de la clase obrera, su no secundarización ni instrumentación por una dirección conciente, y sobre todo la constatación de que la clase misma se constituye como tal en la lucha: la gestación de la organización y la dirección conciente no precede sino que sucede a la movilización de la clase. El proceso revolucionario se alimenta de la acción colectiva de las masas. Son ellas las que generan las mismas condiciones de posibilidad de la transferencia del poder y de un poder de clase capaz de disputar la supremacía.

A partir de los '60 comienza a desarrollarse en los países centrales un abandono de la matriz estadocéntrica del proceso de cambio revolucionario entendido como "lucha por el poder". Como certeramente indica Wallerstein, mayo del '68 y antes las movilizaciones en Praga y Hungría, suponen el comienzo del agotamiento de la figura del Estado como centro de gravedad de la intervención de masas. El desarrollo de los nuevos movimientos sociales (pacifismo, ecologismo, contraculturales, feminismo y derechos sexuales, etc.) muestra nuevas formas de elaboración de la emancipación humana y sobre todo nuevas formas de desafío radical al status quo que sin embargo eluden la lucha por la "transferencia del poder" y sus tácticas se basan en acción colectiva desafiante pero no decididamente ilegal y mucho menos violenta. El proceso de intervención para el cambio deja de tomar como horizonte la guerra civil por el control monopólico de la autoridad política y pasa a tener como horizonte la desobediencia civil o la resistencia al poder. El concepto de sociedad civil y la autoorganización autónoma tienden a desplazar a los de clase, partido, vanguardia, etc. La idea de radicalismo autolimitante (Cohen, 1985: 4) y la extirpación de la concepción de la lucha como guerra son fundamentales para los movimientos. La acción colectiva deja de ser un dispositivo instrumental únicamente de valor estratégico para tomar el poder y desde allí transformar, sino que tiende a constituirse en la forma misma del cambio motorizando procesos de identificación y conciencia, y también logrando incidir en la toma de decisiones y políticas públicas. Los movimientos sociales aúnan prácticas no solamente estratégicas sino también expresivas, comunicativas y normativas.

En A. Latina y el Tercer Mundo las luchas de liberación nacional fueron encaradas con la misma idea de la centralidad estatal: la autodeterminación de los pueblos se basaba en la idea de control monopólico de la fuerza sobre un territorio. Las revoluciones antiimperialistas en China, Asia, Africa y A. Latina supusieron el accionar de poderosos contraestados político-militares de base agraria que peleaban palmo a palmo el control del territorio, o la fractura notable de las clases dominantes y sus instituciones, especialmente las fuerzas armadas como en los casos del nasserismo y el peronismo, o la emergencia de poderosas fuerzas identitarias de base religiosa como en el caso de Irán y otros países islámicos.

Sin embargo, pronto se vería que la descolonización se convertía en otra falacia y el proceso de regresión comenzado desde mediados de los '70 se convertiría en un franco reestablecimiento de fuertes relaciones de dominación económica y geopolítica a partir de los '90 de la mano del fin de la guerra fría y la globalización inspirada en el neoliberalismo.

En este nuevo contexto cabe preguntarse ¿se produce un proceso de desestatización de la lucha social y de los sistemas de creencias vinculados a los sectores movilizados por transformaciones? ¿se reitera con atraso en nuestros países lo ocurrido en los países centrales? ¿qué muestra el ciclo ascendente de luchas sociales y políticas?

Una de las cuestiones controvertidas introducidas por A. Negri, P. Virno y otros⁸ en el moderno debate sobre la revolución es “el principio de la no homologabilidad” entre el poder constituido y el poder constituyente de las masas, del trabajo vivo en movimiento. Negri (2001) plantea la diferencia absoluta entre la forma estatal – política- democrática – de derecho, del poder constituido y la forma productiva-vital-imaginativa del poder constituyente que no está destinado a “sustituir”, desplazar, ocupar o transferirse el poder existente sino a generar formas nuevas de vida y libertad. En vez de una homogeneización, centralización, y polaridad de los antagonismos, el proceso parece asumir la forma de la multiplicidad, descentración, y multidimensionalidad de los enfrentamientos. Siguiendo las líneas maestras trazadas por la hermenéutica del sujeto y los últimos textos de Foucault se trataría de las mil formas de resistencia y lucha en las que el sujeto se sustrae al influjo fatal del biopoder y su dispositivo fundamental, el Estado. La decadencia y los fracasos de los partidos de izquierda sean electorales reformistas o insurreccionales revolucionarios, de los sindicatos, y de los movimientos de liberación nacional es explicada por sus presupuestos “estadocéntricos” y “biopolíticos”.

LA RUPTURA DEL ZAPATISMO

El movimiento zapatista ha sido precursor en la deconstrucción de estos presupuestos que fijan las relaciones habituales entre movilización social, el estado y la lucha política de los subalternos.

Heredera de una rica tradición que arranca desde las reformas cardenistas, las comunidades indígenas se convirtieron en “comunidades revolucionarias institucionalizadas, amarradas al Estado” (Gilly1998:52). En la década del '60 gozaban de una autonomía que se gestaba imperceptiblemente y las represiones de los '80 los fueron inclinando lentamente a una organización de tipo insurgente pero con características inauditas.

En principio el zapatismo propone una superación teórica y práctica de la contradicción entre reivindicación de intereses particulares y bien común: los derechos de las comunidades y pueblos indígenas son inscriptos en el conjunto de las luchas populares de todo tipo sin exclusiones no solo en México sino en el mundo mismo. Las consignas “para todos todo, nada para nosotros”, “detrás de nosotros estamos Ustedes” y “luchar por un mundo en el que quepan todos los mundos”, son suficientemente elocuentes acerca de descartar un particularismo esencialista o una definición restrictiva o excluyente de intereses e identidades. Es acertada la observación de Gilly (1998) respecto de la “reapropiación” por el EZLN de los símbolos nacionales, la bandera mexicana y las consignas y simbología de la historia zapatista, al mismo tiempo que obligan a los negociadores estatales a hablar en las

lenguas originarias!. En este sentido el EZ no se propone como un movimiento indigenista sino indígena y no pone en cuestión sino que reivindica su pertenencia nacional.

En sintonía con esto, se plantea la superación de la contradicción entre luchas reivindicativas sectoriales y luchas políticas por cambios generales en la sociedad: el conjunto del proceso de conflicto y negociación por los derechos indígenas en Chiapas muestra claramente la estrategia de “envolver” la lucha reivindicativa dentro de la lucha política general. La interpelación permanente al resto de las clases populares y la opinión pública nacional y mundial, los apoyos recíprocos con alguna parte del sistema político, la articulación en la acción colectiva con vastos sectores movilizados, incluyendo algunos sectores de la política institucional, y el énfasis puesto en la necesidad de debilitar el monopolio político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a nivel estatal y abrir la democracia son suficientemente elocuentes en este sentido. Sin embargo, es claro que el movimiento zapatista no lucha por el poder, no tiene pretensión de detentar la autoridad ni la dirección del gobierno, no intenta alternativizar la soberanía del Estado mexicano a tal punto que podría definirse la lucha por el reconocimiento de los derechos de autonomía como un intento muy claro de “integración política no subordinada” más que desafío abierto. La Marcha de la Dignidad Indígena, la marcha del color de la tierra, es quizás la encarnación en acto más notable de esta concepción universalista de las particularidades, antivanguardista pero desde el frente, e incluyente y selectiva al mismo tiempo.

El principio propio de los movimientos sociales, la autolimitación del accionar y las demandas (Cohen, 1985), rige plenamente en el zapatismo no como un recorte de sus alcances sino todo lo contrario⁹. Aparece en el zapatismo una concepción -si se me permite la expresión- “minimalista”: empequeñeciéndonos hasta hacernos inasibles e incomprensibles para el poder, nos agrandamos. La fortaleza en la humildad de los débiles es el espejo en donde se desnuda la debilidad de la omnipotencia del poder.

El minimalismo alcanza hasta la definición misma del objetivo estratégico: “No se trata de la conquista del poder o de la implantación (por vías pacíficas o violentas) de un nuevo sistema social, sino de algo anterior a una y otra...no estamos proponiendo una revolución ortodoxa, sino algo mucho más difícil: una revolución que haga posible la revolución”¹⁰ “...Quien se plantea transformar las cosas desde arriba confiesa que la revolución ya se ha frustrado...” (Marcos, 1999).

Podría pensarse que con estas concepciones el zapatismo es un inocuo movimiento de predicadores que plantea una suerte de revolución de las conciencias, nuevas subjetividades, mientras se acepta el poder, etc. Pero el zapatismo sigue sosteniendo las ideas de insurgencia y de resistencia, sigue siendo un ejército sui generis, pero ejército al fin. Es un ejército que no intenta derrotar a otro ejército, es una insurgencia que no intenta transferirse el poder. “El problema de la insurgencia civil no es quién está en el gobierno, sino cómo garantizar que el que mande, mande obedeciendo” (EZLN, 1996).

La autoexclusión de la lucha por el poder, la denegación de la pretensión de gobernar, la invocación del derecho al buen gobierno y la definición de un objetivo político tan humilde y al mismo tiempo tan difícil, tiene consecuencias sumamente delicadas. Una primera lectura posible es que significa una peligrosa concepción antipolítica inscrita en temáticas de la posmodernización de la política sacrificada en el altar de la sociedad civil, tomada como categoría negadora del antagonismo de clases (Borón, 2001). Pero visto a la luz de la idea

de “revolución que haga posible la revolución” y de la supremacía del concepto de rebeldía sobre el de revolución es claro que la insurgencia como rebeldía sistemática, la desobediencia civil y las resistencias continuas, multiformes, dispersas pero articuladas, constituyen la forma misma de una política nueva y posiblemente de una nueva forma de “hacer poder” tanto como de “poder hacer”, parafraseando a Holloway (2002: 54 y ss).

La idea de que una revolución fracasada fortalece al sistema (“los revolucionarios terminan siendo políticos, no así el rebelde” dice Marcos), que una revolución triunfante prematura es un fracaso futuro, y que en cambio una rebelión continua lo debilita y genera las condiciones para una Revolución de nuevo tipo, introduce una disyuntiva ciertamente sofisticada¹¹ pero no necesariamente posmoderna, ni mucho menos reformista.

En este sentido, cabría la lectura de que no se trata de hacer política autónoma desde la sociedad civil como algo enfrentado a la sociedad política y el Estado, se trata de estructurar políticamente una intervención generalizada de masas contra el poder en todos los niveles y no de una política para tomar el poder.

A nadie puede sorprender la idea de que la política es mucho más que la lucha por el poder si recordamos la frase de Lenin: “la política comienza ahí donde se reúnen las masas para hablar de su situación y su destino”. Pensar la política de masas como una simple forma instrumental de llegar al poder es una deformación ideológica que no hace justicia a ningún proceso revolucionario de la historia. Sin embargo, las grandes revoluciones todas han tenido grupos organizados que perseguían concientemente el objetivo de alcanzar el monopolio del poder y de cambiar la organización social desde el poder.

La idea zapatista de garantizar un poder que mande obedeciendo no excluye de principio una transferencia del poder hacia nuevos sectores, pero no la agota allí. Tampoco puede confundirse con las funciones que hasta el Banco Mundial y la socialdemocracia moderna le otorgan a los nuevos movimientos sociales y las ONG: la vigilancia y el control ciudadano “externo” de la gestión política democrática del Estado. En este esquema la sociedad civil aparece como “contrapesando” los excesos del sistema político institucional, y el principio fundante de la autolimitación de los movimientos sociales en realidad consagra lo que se pretende enmendar: por un lado, la innaccesibilidad de las masas a la política, entendida como un asunto de profesionales en la “síntesis” de intereses particulares y el procesamiento de demandas, única forma válida de conformación del bien común. Por el otro, condena a los sectores movilizados con autonomía en la sociedad civil a jugar el papel de defensores de intereses particulares dado que los movimientos sociales no deberían pretender participar en la elaboración del bien común reservado al monopolio de los partidos políticos, y por tanto no tienen otro campo que la expresión de identidades y demandas necesariamente particulares.

El zapatismo propone una suerte de insurrección permanente que garantice el cumplimiento del principio de que el que manda debe mandar obedeciendo, y alude a una situación de asedio del poder a través de una rebeldía sistemática y continua que asume todas las formas, metodologías, niveles de compromiso individuales y colectivos en todos los frentes. No puede haber renuncia a ningún espacio de lucha por la sencilla razón que el problema no es quien detenta el poder o cómo llegar a detentarlo sino quien lo ejerce y cómo lo podemos ejercer todo el tiempo en todo lugar.

Por último vale puntualizar que el zapatismo, como movimiento que excede al EZLN, plantea la estrategia tradicional de los movimientos sociales masivos, de acuerdo al brillante análisis que McCarthy (1999: 413) ha aplicado al movimiento por los derechos civiles en EEUU en los '60 (la SCLC de M. Luther King).

Su fórmula estratégica parece basarse en la combinación de dos elementos aparentemente incongruentes: por un lado, discursos y reivindicaciones moderados con altos niveles de universalidad que pudieran interpelar con éxito a vastas audiencias y sectores amplios; por otro lado, tácticas disruptivas espectaculares de amenaza de alteración del orden que atrajeran la atención de los medios masivos y la opinión pública, además de introducir fuertes problemas políticos y alterar las agendas gubernamentales. Esta estrategia lejos de desafiar el poder constituido lo somete a un desgaste y aislamiento y sobre todo se orienta a hacer imposible o sumamente costosa la represión y la deslegitimación de las demandas y los sectores movilizados.

Por otra parte, el zapatismo si bien hace eje en las reivindicaciones de los pueblos indígenas, no puede confundirse con un "movimiento de un solo asunto" que podría ser integrado a los sistemas de intermediación de intereses y poder a partir de concesiones y cargos. El sostenimiento de cuestionamientos profundos al orden social, económico, político y cultural hace del zapatismo una suerte de cantero inagotable y fuente de inspiración de radicalidad emancipatoria y "alternatividad" (Gallardo, 2002) no solamente para los mexicanos sino para todos los movimientos contestatarios del mundo.

Podría decirse que el zapatismo representa la primera experiencia "subrevolucionaria" exitosa (va a cumplir una década con una vitalidad inegable), alejada tanto de la grandilocuencia ideológica y la ostentación de poder de aparatos, como de la exaltación ejemplar de valores morales (sacrificio militante, heroísmo, fanatismo ideológico, siempre próximos al sectarismo) instrumentados como recursos políticos. Podría decirse que la palabra y la actitud zapatista se instalan y germinan en el deseo de cambio, deseo político y colectivo por excelencia, deseo multiforme que une sin uniformar.

TODOS SOMOS ZAPATISTAS PERO NO TODO ES ZAPATISMO: LA TRANSFERENCIA DEL PODER TAMBIÉN EXISTE

Sin embargo, existen en los últimos años varios tipos de experiencias en A. Latina, además del zapatismo, que plantean rupturas importantes con las tradiciones revolucionarias.

En la práctica el zapatismo ha optado por un perfil político más cercano a un movimiento social puro: casi no incursiona en la política institucionalizada (excepción hecha al guiño al PRD en las elecciones presidenciales de 1995), no ha participado en una gesta de lucha no institucionalizada por el poder estatal ni tampoco se ha constituido en un grupo de presión o de interés dentro del sistema aunque se ha esmerado por institucionalizar el diálogo y la negociación (la Cocopa), preservando la universalidad de sus posiciones y su discurso. Pero ésta no es la norma sino la excepción en el contexto de las luchas populares en A. Latina.

Una de las experiencias más desarrolladas de protagonismo político de movimientos con capacidad de intervención de masas es la de los indígenas de Ecuador¹² que protagonizaron un proceso espectacularmente ascendente desde 1986 con la creación de la Confederación

de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) que reunió a etnias quechuas de la sierra y la amazonia (Albó, 2002). Sorprendieron con su rápido desarrollo organizativo de estructuras locales y transterritoriales con una creciente capacidad de convocatoria y movilización que hicieron posible el levantamiento nacional indígena de 1990 con una huelga cívica de una semana, bloqueos a ciudades, cese de abastecimientos, marchas a las capitales, y ocupación de edificios públicos. Las escenas del levantamiento indígena se repitieron entre 1992 y 1995 contra la ley agraria regresiva que pretendía imponer el gobierno ultraliberal de Durán Ballén. Sobresalen los resultados favorables en estos conflictos en donde logran frenarse decisiones políticas importantes.

Sin embargo, lo más novedoso de las orientaciones de la CONAIE es su fuerte y temprana vocación de intervención política institucional y la duplicidad de su funcionamiento: fuerte desarrollo organizativo y reivindicativo por abajo y fuerte protagonismo por arriba. A su vez ese protagonismo no es solamente en tanto movimiento reivindicativo sino también político. Aunque se ha cuidado de no adquirir una tonalidad política o partidaria determinada, no ha dudado en participar con bastante éxito en coaliciones electorales¹³ (en 1996), lograr representación parlamentaria propia, posicionar liderazgos reconocidos en la escena política nacional (Antonio Vargas, Ricardo Ulcurango, Manuel Llucó) participar en la remoción del gobierno de Bucaram en 1997 (al que había apoyado antes) y, lo que es más importante, lograr que la reforma constitucional de ese año contemplara el notable reconocimiento de que el Ecuador es un país pluricultural y multiétnico. Conaie contribuyó a instalar una identidad multiétnica en la sociedad ecuatoriana (Barrera, 2002).

En la amazonia los indios organizados y movilizados por la CONAIE se opusieron exitosamente a las exploraciones petroleras y negociaron con las empresas nuevos términos para las mismas. En 1999 comenzó un proceso de resistencia generalizada a los planes de ajuste del gobierno de Mahuad que derivó en el levantamiento indígena que culminó el 21 de enero de 2000 con la toma de los poderes públicos y el nombramiento por doce horas de un triunvirato revolucionario compartido con un militar y un representante de los movimientos sociales no indígenas.

La vocación política (casi diría, la “voracidad política”) ha llevado a la CONAIE a incursionar en todas las formas de lucha e intervención (excluyendo la lucha armada), electoral, presión por la acción colectiva, golpe cívico militar, levantamiento y revuelta. No hay un rechazo de principio a las formas institucionales de lucha política y tampoco existe un discurso de demandas radicalizadas, pero persisten en presentarse como movimiento antisistema: en enero del 2000 iniciaron la experiencia del Parlamento del Pueblo convocando a sectores no indígenas que llegó a demandar la renuncia masiva de los responsables de los tres poderes del estado ante el “evidente fracaso de la actual dirigencia política”. El reclamo de disolución de los tres poderes precursor del argentino “que se vayan todos” muestra una notable versatilidad estratégica no atada a esquemas fijos y atenta a las oportunidades que abren las distintas coyunturas.

Por otra parte, han desarrollado una amplia política de alianzas: con partidos de izquierda (Frente Popular, donde son importantes los sectores docentes y de empleados estatales), con los movimientos sociales no indígenas (Coordinadora de Movimientos Sociales, CMS), y fuerte coordinación en la acción con organizaciones obreras (FUT) y campesinas, transportistas, docentes, y por supuesto, sectores militares a los que suele interpelar públicamente. La visión de la Conaie es similar a la del zapatismo en la preocupación por

evitar el encapsulamiento sectorial en identidades e intereses fijos que seguramente los terminaría convirtiendo en un grupo de presión más. La consigna de 1999: “Nada solo para los indios” fue clave para orientar el tipo de práctica política que privilegia la articulación con otros sectores.

La victoria del ex coronel Lucio Gutiérrez, líder del golpe y la insurrección indígena-militar del 2000, en primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales en noviembre de 2003¹⁴ significa también el acceso de la Conaie a la gestión política del Estado. Es decir, se ha producido dos años después y de manera diferida una consecuencia de la insurrección generalizada del 2000: una transferencia de poder hacia nuevos grupos sociales que acceden a posiciones de cúspide en el aparato del Estado con legitimidad electoral. El éxito electoral le garantiza acceso al poder ejecutivo pero no ha cambiado en nada las relaciones de fuerzas en los otros poderes públicos y aparatos del estado. Resultaba así una transferencia débil desde el punto de vista cuantitativo y el gobierno de Gutiérrez fue presa del “trauma estatal”. Las defecciones de Gutiérrez y parte de los sectores que lo sostenían y los intentos de prescindir de los apoyos indígenas además de renunciar a realizar cambios económicos y sociales, llevaron a una nueva vorágine movilizadora generalizada que culminó en un cambio de gobierno y un proceso de transición que llevó a la emergencia de un nuevo liderazgo electoral victorioso del conglomerado de fuerzas populares: el del actual presidente Rafael Correa.

El caso venezolano es completamente atípico. Por una parte, superficialmente se asimila al caso ecuatoriano, en la medida en que pueda interpretarse como una alianza entre fracciones de las FFAA y amplios sectores descontentos no organizados de las clases populares que encuentran a través de las FFAA y de un liderazgo personalista una expresión de sus intereses y demandas. También se puede interpretar el liderazgo de masas de Chávez y su resultante predominio electoral como un efecto diferido de transferencia de poder cuyo antecedente es el golpe militar con apoyo popular fallido en 1992.

Pero allí acaban los parecidos. 1) En Venezuela no existen movimientos sociales autónomos significativos que hayan desarrollado extensas experiencias de lucha anteriores. No obstante, desde el “caracazo” en adelante y de la mano del completo hundimiento de los sistemas de mediación de los partidos tradicionales, se puede observar una propensión a la acción colectiva directa de carácter político más que reivindicativo. Las sucesiones de gigantescas concentraciones y actos de apoyo activo al gobierno muestra una voluntad colectiva que se inscribe en el viejo dispositivo de la relación directa líder-masas, ausente en el Ecuador. 2) Los espectaculares triunfos electorales del MVR (Mov. 5ta. República) y el notable liderazgo de masas de la figura de Chávez significan el completo hundimiento del sistema bipartidista anterior de alternancia perfecta entre adecos y copeyanos. Las elites económicas y políticas venezolanas tampoco pudieron modificar la oferta electoral de manera de condicionar exitosamente el ascenso de Chávez, mientras sí pudieron hacerlo con el empresario Noboa en Ecuador. 3) El rasgo más importante a destacar de la experiencia del chavismo es el alcance que fue asumiendo la transferencia del poder: reforma constitucional, minimización electoral de las elites tradicionales, pérdida de sus posiciones de control parlamentario, y del control del poder judicial, de la empresa estatal del petróleo, de los resortes administrativos del estado, etc.

El importantísimo grado de control político sobre los aparatos del estado puede catalogarse de cuasi exclusión selectiva de elites y clases dominantes tradicionales de las esferas de

decisión estatales. El avance sobre la CTV (Central sindical tradicionalmente controlada por los adecos) con un intento de modificar los mecanismos de eternización de las cúpulas y el surgimiento de la Federación Bolivariana de Trabajadores impulsada por el oficialismo, las intervenciones a las Universidades, las reformas a los sistemas de enseñanza y de salud públicas, y finalmente la ofensiva sobre PDVSA (empresa petrolera estatal), fueron arrinconando a las elites desplazadas y sus clases de apoyo en los medios de comunicación y en la acción de protesta civil, unida a la oposición de sectores minoritarios de la oficialidad de las Fuerzas Armadas. Se ha llegado a tal punto de profundización de la estrategia de control total del Estado y de unificación del poder político, que el gobierno ha terminado expulsando y forzando a pasar a la oposición a su figura más dialoguista: J. L. Miquelena (ex Ministro de la cartera política)¹⁵.

Ante esta situación de fuerte transferencia del poder gubernamental, en un juego de inversión de roles inusitado, las clases dominantes amenazadas adoptaron como recurso la movilización de las fracciones descontentas y la opinión pública, en una estrategia similar a la seguida contra S. Allende hace 30 años. Es con la acción colectiva desde el terreno de la sociedad civil que las elites y elencos tradicionales desafían a un Estado fuertemente hostil. Lo llamativo de la estrategia de Chávez es que esta férrea lucha por el control del Estado se ha acompañado por unas políticas económicas y sociales relativamente moderadas aunque no inocuas. Recién en el 2002 con la sanción de la reforma de la Ley de Tierras y del régimen de PDVSA se tocan estructuralmente intereses arraigados de las clases dominantes y las burocracias adictas.

En principio, la importancia teórica de la estrategia política del chavismo estriba en que parece contraponerse directamente con la planteada por el zapatismo. El Estado es visto como objeto principal y prioritario de la lucha política y se aspira a su control para vehicular las reformas. La organización autónoma de las masas es relegada y subalternizada por un liderazgo directo y con tendencias plebiscitarias, aunque no se deben olvidar las iniciativas como los Círculos Bolivarianos y otras de carácter de promoción local y de asistencia a sectores populares, muchas de ellas reproduciendo los mismos vicios de los partidos políticos tradicionales. No obstante, la fuente de legitimidad principal sigue siendo el aval electoral de la población a la gestión de gobierno.

La “revolución bolivariana” ofrece una importancia analítica adicional: el control amplio del poder político supone la ausencia de límites internos a la radicalización. En efecto, la pérdida de lealtad de las fuerzas armadas a las clases dominantes, y la exclusión o reducción de influencia de estas en los aparatos del estado, supone que no hay límites internos al poder político para establecer orientaciones más avanzadas en materia de cambios sobre el orden social. El liderazgo y los estilos verticalistas dentro del oficialismo previenen o minimizan los riesgos de fracturas o divisiones importantes, y por tanto la gestión del Estado goza de un grado importante de libre control de recursos y herramientas de implementación¹⁶. El costo de esta estrategia lo hemos mencionado: las clases defensoras del status quo anterior intentan establecer un límite externo y focos de conflicto al nivel de la sociedad civil y la opinión pública a través del control de los medios de comunicación, cifrando en el aprovechamiento del aislamiento del gobierno y de su desprestigio una oportunidad para recuperar el control del Estado mediante un golpe de estado cívico-militar. En este sentido, es absolutamente claro que no existe una lógica de movimientos sociales ni de control ciudadano, todos los conflictos tienden a orientarse hacia las disputas por el poder estatal. La insurrección civil y militar de abril del 2002, la contrainsurrección popular y militar que le

siguió y la huelga insurreccional opositora de comienzos del año 2003, muestran claramente que las intervenciones de masas son inmediata y crudamente políticas, casi exclusivamente orientadas a dirimir la lucha por el derecho y los recursos de gobierno.

CONCLUSIONES

Las situaciones de crisis del régimen de acumulación y de gobierno por las que atravesaron las sociedades latinoamericanas luego de un década de neoliberalismo, ofrecieron oportunidades y contextos favorables para la irrupción de acciones colectivas y organizaciones desafiantes de vasta escala con contenidos tanto reivindicativos como políticos. Las protestas y las formas de acción colectiva han asumido las más variadas formas que van desde la movilización pacífica ciudadana hasta las acciones disruptivas más audaces (bloqueos, cortes de rutas, ocupaciones) desde las formas más expresivas y simbólicas (ayunos, lavados de banderas, etc.) hasta la acción directa, la desobediencia civil y la resistencia a la autoridad. La única exclusión del repertorio ha sido la lucha armada. Las organizaciones han asumido formas tanto de “movimiento social” más horizontales y alejadas de la lucha por el poder para resistir e impedir la implementación de determinadas decisiones políticas, como estrategias más “políticas” para alcanzar objetivos de acceso al poder. La proliferación de variadas organizaciones de masas de notable envergadura incluyendo expresiones políticas partidarias de nuevo tipo y el protagonismo alcanzado por nuevos actores sociales como los desocupados y los indígenas, configuran un escenario de dinamismo y riqueza de alternativas y experiencias. Sin embargo, uno de los principales problemas teóricos y político prácticos, a saber, el vínculo entre movilización de masas y cambio político, ofrece algunas dificultades por lo contrastante de las situaciones nacionales.

Los efectos políticos más evidentes son a la vez causa y consecuencia de la generalización de la acción colectiva: existen visibles realineamientos entre los grupos detentadores del status quo. En principio se escinden las clases auxiliares y fracciones de sectores medios que apoyaron el modelo neoliberal en su fase expansiva. Algunos de estos sectores medios incluso se sumarán a la acción colectiva (como en Argentina). Aunque el caso de Venezuela sobre todo –pero también en menor medida Bolivia y Ecuador- parece están en las antípodas: no hay sectores de clases dominantes tradicionales que simpaticen con los gobiernos de Chávez y de Gutiérrez o Correa, pero tampoco hay apoyo significativo de las capas medias, sino todo lo contrario. A su vez estos casos difieren por el distinto nivel de transferencia efectiva de poder político: desde el muy alto de Venezuela hasta el muy bajo en el caso de Ecuador.

No obstante el debilitamiento de los sostenes sociales y políticos del orden neoliberal es evidente en la mayoría de los países, por lo que sus posibilidades de recomposición no parecen cercanas.

Por otra parte, la respuesta represiva que se ha ensayado (Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia) tampoco parece viable: las reacciones populares a los decretos e implantación de estados de sitio y de emergencia fueron categóricas en todos los casos. Es evidente que la mera legitimidad electoral no alcanza para legitimar la represión de la protesta social y, sin un mínimo apoyo de la opinión pública, el intento de disuadir la acción colectiva por medios represivos es impracticable y tiene costos políticos enormes. En la mayoría de los casos la intervención de las fuerzas armadas agudizó el conflicto. La contracara de la fuerte resistencia a la represión es el enorme aumento de la legitimidad de la acción colectiva como

recurso político y reivindicativo.

Ahora bien, la relación entre los movimientos de masas y el cambio político es por demás variable. En algunos casos se han logrado procesos de transferencia de poder (Venezuela, Bolivia) más o menos significativas y todas mediante la competencia electoral, aunque en ningún caso puede obviarse la importancia de la movilización de masas en todo el proceso (especialmente en Bolivia). En todos los casos también los gobiernos entrantes traen planteos de políticas económicas y sociales que se diferencian en grados variables de los vigentes hasta ahora.

Las amenazas a que están expuestos los nuevos gobiernos y sus debilidades hacen difícil establecer pronósticos acerca de su evolución. Hasta ahora, los que más han avanzado en términos de implementación de cambios estructurales en algunos rubros son los venezolanos, lo que les ha costado un verdadero asedio por parte de la totalidad de los sectores oponentes al proceso de la revolución bolivariana, profundizando los antagonismos sociales y políticos.

Por el contrario, otros casos de procesos muy importantes de movilización y desarrollo organizativo (Argentina, Perú) no han tenido efectos significativos de transferencia efectiva de poder. Sin embargo, no son despreciables otros efectos de cambio en ofertas y preferencias electorales que puede preanunciar transferencias futuras, o directamente efectos de eficaz veto popular o control defensivo contra políticas y medidas de gobierno. En Perú en cambio el aparente efecto político de la crisis y la movilización colectiva parece ser el reflatamiento electoral del viejo partido APRA pero simultáneamente la aparición de un liderazgo personalista de carácter novedoso el de O. Humala.

En Argentina el proceso parece consistir en una reestructuración de los partidos tradicionales con divisiones, nuevos liderazgos y reordenamientos internos, pero no por irrupción de nuevos actores desde afuera del sistema político establecido. En el caso de Argentina además del advenimiento de figuras políticas antes secundarias como el presidente Kirchner aparecen discursos, alineamientos internacionales y políticas económicas donde si bien no aparecen cambios estructurales significativos, se subraya una mayor autonomía estatal frente a los grupos dominantes, mayor distribución de recursos a las clases populares, nuevos alineamientos internacionales y políticas de cooptación e integración de las principales expresiones organizativas de los movimientos de desocupados a través de políticas sociales, de vivienda y desarrollo social.

En Bolivia han aparecido con fuerza electoral nuevos actores que rompen el control de los tres partidos tradicionales y que a través del MAS y la figura de Evo Morales lograron articular el espacio de la movilización de las masas subalternas constituyendo una fuerza político institucional que finalmente accede al gobierno a través de un notable triunfo electoral. Los cambios introducidos por el nuevo gobierno incluyen algunos aspectos estructurales como la reapropiación de los recursos del subsuelo (el gas) y una renegociación con las empresas internacionales usufructuarias del mismo, y nuevas políticas agrarias y mineras, además de nuevos alineamientos internacionales.

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA

Albó, X. (2003): *Pueblos indios en la política*, Ed.Plural, La Paz.

- Anderson, P.(1999) : *Historia y lecciones del neoliberalismo*, Ed. California University.
- Barrera, A. (2002): “El movimiento indígena ecuatoriano: entre los actores sociales y el sistema político”, Rev. *Nueva Sociedad*, N°182, Caracas.
- Borón, A. (2002): “La selva y la polis, interrogantes en torno a la teoría política del zapatismo”, Rev. *América Libre*, Buenos Aires.
- Cavarozzi, M. y Abal Medina, J.M. (2002): *El asedio a la política*, Homo Sapiens, Buenos Aires.
- Ceceña, M. E. (2001): “La marcha de la dignidad indígena”, en OSAL N°4, Buenos Aires, CLACSO.
- CLACSO: *Observatorio Social de América Latina*, Publicación del OSAL, N° 1/00 a N° 9/03.
- Cohen, J. (1991): “Estrategia o identidad: paradigmas teóricos nuevos y movimientos sociales contemporáneos”, en *VVAA Teoría de los Movimientos sociales*, Cuadernos de Ciencias Sociales-FLACSO.
- EZLN (1997): *Documentos y Comunicados*, tomo 3, Ediciones Era, México,.
- Gallardo, H. (2002): “Cambios mundiales”, en Rev. *América Libre*, N°19, Buenos Aires.
- García Linera, A. (2001): “Sindicato, multitud y comunidad.Movimientos sociales y formas de autonomía política en Bolivia” en *Tiempos de Rebelión*, G. Linera, R. Gutierrez y ot., Ed. Muela del diablo, Bolivia.
- Gilly, A. (1998): *Chiapas: la razón ardiente. Ensayo sobre la rebelión del mundo encantado*, Ed. Era, México.
- Gómez, M. (2006): “Crisis y recomposición de la respuesta política estatal ante la acción colectiva desafiante en la Argentina 1989-2004”, *Revista Argentina de Sociología* N° 6/Junio 2006, Buenos Aires.
- (2003): “Social movements and collective action in Latin America: some questions on the potential political transformer of the masses’ interventions” en Rev. *Theomai*, N° 7, first semester of 2003.
- (2002): “Crisis del capitalismo, formas de conciencia y emergencia de la acción colectiva en la Argentina” en *Revista Theomai*, Nro.Especial.
- (2001): “La globalización impensada” en *Revista Archivos del Presente*, N°23, Marzo/01, Buenos Aires.
- Holloway, J. (2002): *Cambiar el mundo sin tomar el poder*, Herramienta – Universidad Autónoma de Puebla, Buenos Aires.
- Loáizaga, P. (2001): “Marcos: guerrilla y democracia” en *Revista Archivos del Presente*, N°23, Marzo/01, Buenos Aires.

- Lopez Maya, M. (2002): "Recuento de una semana fatídica", en OSAL, N°7/02.
- Meiskins Wood, E. (1996): *Democracy against Capitalism*, Cambridge University Press.
- Negri, T. (2001): *Contrapoder en Colectivo Situaciones*, Contrapoder, Ed. De mano en mano, Buenos Aires.
- Negri, T. y Virno, P. (2002): *Crisis de la política*, Buenos Aires, El cielo por asalto.
- Nun, J. (2002): *Democracia: gobierno del pueblo o gobierno de los políticos*, FCE, Buenos Aires.
- Subcomandante Marcos (1999): *Don Durito de la Lacandona*, CIACH, México.
(2001) *El correo de la Selva*, Retórica Ediciones.
- Saint Upery, M. (2002): "Ecuador: el coronel tiene quien le escuche", Rev. *Nueva Sociedad*, N°182, Caracas
- Svampa, M. (2005a): *La sociedad excluyente. La argentina bajo el signo del neoliberalismo*, Buenos Aires, Taurus.
(2005b) "Argentina: el devenir de los piqueteros", en *Movimientos y poderes de izquierda en América Latina*, Ed. Popular, Madrid, 2005.
- Tarrow, S. (1997): *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Alianza, Madrid.
- Tilly, Ch.(1999): "Conflicto político y cambio social", en Ibarra y Tejerina, op.cit.
- Touraine, A. (1997): *¿Podremos vivir juntos?*, FCE, México.
- Wallerstein, I y ot. (2004) "Nuevas revueltas contra el sistema" en *Capitalismo Histórico y Movimientos antisistémicos*, Ed. Akal, Madrid.
- Zibecchi, R. (1999): *La mirada horizontal. Movimientos sociales y emancipación*, Ed. Nordan, Montevideo.
- Zalles Cueto, A. (2002): "De la revuelta campesina a la autonomía política: la crisis boliviana y la cuestión aymará" en *Revista Nueva Sociedad*, N°182/02.

¹ Desde el levantamiento indígena combinado con golpe de estado cívico-militar en Ecuador a comienzos del 2000 hasta las revueltas urbanas generalizadas en Bolivia y Perú en los últimos años, pasando por la pueblada en la Argentina a fines del 2001 y la contramovilización cívico-militar que repuso a Chávez en Venezuela, tenemos un panorama de una riqueza impresionante. En el mismo sentido puede verse el desarrollo de organizaciones populares y movimientos que ofrecen un panorama de innovación organizativa, identitaria y de metodologías de lucha: desde la CONAIE ecuatoriana, los coccaleros bolivianos, los círculos bolivarianos, y los piqueteros en la Argentina, hasta el MST en Brasil, el zapatismo, los movimientos indígenas centroamericanos, los mapuches en Chile, las organizaciones de defensa del agua y el gas en Bolivia, las fábricas recuperadas en la Argentina, los movimientos cívicos en Perú, Argentina y Guatemala. Tampoco deberían olvidarse las experiencias de nuevas expresiones del movimiento sindical: la CUT en Brasil, el PIT-CNT en Uruguay, la CTA en Argentina, la COB boliviana, el FUT ecuatoriano, el dinamismo del sindicalismo docente y de

empleados estatales en casi todos los países. Tampoco puede obviarse la experiencia de partidos políticos como el PT en Brasil, el Pachakutik y el Frente Popular de Ecuador, el Frente Amplio en Uruguay, el MAS boliviano, y diversas expresiones menores de nuevo tipo en otros países centroamericanos.

² Ex Ministro del gobierno de Menem y el principal responsable de la implementación del modelo neoliberal en la Argentina bajo la forma de la convertibilidad de la moneda. Nunca había sido peronista y luego de su salida del gobierno lideró un nuevo partido político.

³ Lo mismo ocurrió en Bolivia con la represión a estudiantes y policías que protestaban y que derivó en una suerte de levantamiento casi insurreccional con gravísimos desmanes en abril del 2003. Ya en abril/00 había ocurrido algo semejante en la llamada “guerra del agua” en Cochabamba, y también en Perú en junio/02 con las protestas contra la venta de las empresas de electricidad en Arequipa y Tacna: la intervención represiva en realidad terminó desatando una fuertísima reacción popular que finalmente obliga al gobierno a desistir del control represivo de la situación y a retrotraer las medidas privatizadoras.

⁴ Formas de protesta de difícil o imposible represión y con escasos costos individuales para los participantes, combinadas con fuertes repercusiones mediáticas.

⁵ La contradicción entre democracia y capitalismo ha sido remarcada frecuentemente (Mesikins Wood, 1996): los dispositivos excluyentes de mercado plantean a la política democrática serios desafíos no solamente en nuestros países. Sin embargo, en la experiencia latinoamericana de democracia neoliberal lo usual ha sido: mala democracia pero peores mercados. Los saqueos por un lado, y la confiscación de ahorros bancarios son muestras de esta situación que pueden ser interpretadas en términos de “cognición caliente” y “liberación cognitiva” (Zald, 1999: 369 y ss) que muestra súbitamente a vastos públicos el sentido de algunos procesos.

⁶ Utilizamos la secuencia clásica de Skopcol (1984): crisis-insurrección-transferencia de poder-cambio del orden social desde el poder. Los primeros dos momentos constituyen la situación revolucionaria, y los últimos la salida revolucionaria.

⁷ Ver las crónicas de los conflictos en “Observatorio Social de América Latina” OSAL/CLACSO.

⁸ Resulta particularmente interesante el trabajo de Benasayag y Sztulwark (2000) que propone el concepto de potencia y de situación como contrarios a los de poder y hegemonía. Los actos liberadores son los que nos subjetivizan al tiempo que nos sumergen en una situación y no los que nos ponen “al servicio” de una causa o una organización que les daría sentido.

⁹ “En realidad lo único que nos hemos propuesto es cambiar al mundo, lo demás lo hemos improvisado” C.C. Revolucionario Indígena. CG del EZLN

¹⁰ Siguiendo con los juegos de palabras y el estilo de pensamiento revolucionario de Marcos, podría decirse que el zapatismo impulsa una “subrevolución”, quizás esto revele el “misterio”: Marcos es el “Sub” comandante.

¹¹ La idea de una continua, paciente y multiforme erosión que al mismo tiempo es gestación de nuevas formas de socialidad, organización, conciencia y acción política, está emparentada con los planteos de Wallerstein (1994) acerca de un proceso de transformación por sobrecarga del sistema.

¹² Son tres millones de indígenas sobre 12 millones de habitantes.

¹³ Forman el Pachakutik, Movimiento de Unidad Plurinacional – Nuevo País, con el que participan en las elecciones.

¹⁴ En un sistema político en crisis se impuso con un partido recién formado con el 21 % de los votos en primera vuelta y con un categórico 55% a 45% sobre el magnate bananero A. Noboa, en la segunda vuelta.

¹⁵ Podría decirse que el gobierno de Chávez ha llevado más lejos la consigna “que se vayan todos” en términos de un desplazamiento brutal de las elites y elencos gobernantes anteriores.

¹⁶ No hace falta aclarar la importancia de los recursos derivados del precio del petróleo y de su reapropiación por un nuevo comando político que expulsó las burocracias anteriores que controlaban el presupuesto.